

En este número

La política exterior mexicana atraviesa un periodo de transformaciones. Entre ellas destaca su mayor independencia relativa de las posiciones norteamericanas. Este cambio se inició bajo el gobierno de Luis Echeverría, pero se afirmó durante la presidencia de José López Portillo sobre todo en relación con las zonas centroamericana y caribeña. Este último gobierno ha estrechado como nunca antes los vínculos con Cuba, rompió relaciones con la dictadura somocista, se opuso en la OEA a los planes norteamericanos de intervención armada en Nicaragua en el momento culminante de la ofensiva sandinista, reconoció (junto con Francia) al FMLN y al FDR salvadoreños como fuerzas políticas representativas y, en fin, desarticuló mediante una serie de contrapropuestas la posibilidad de un patrocinio multinacional al llamado "mini-plan Marshall" de Reagan. Son posiciones no sólo opuestas a las de Estados Unidos, sino que además indican un despliegue ofensivo de la diplomacia mexicana sobre el contexto regional. Pero no poseen un valor intrínseco democrático o progresista: la expulsión masiva de refugiados guatemaltecos les niega rotundamente ese significado. Son las señales de un laborioso proceso de reformulación estratégica de una nueva práctica política externa, que se propone reubicar el papel de México dentro del espacio geopolítico en el que está inserto. Y que, además, entrañan una necesidad más honda y más amplia: renegociar las relaciones globales entre el capitalismo mexicano y el centro imperialista.

Esa necesidad de fondo, determinada ya por la dimensión alcanzada por la economía mexicana, se tomó imperiosa a partir de 1978, cuando el gobierno empezó a reivindicar la existencia de enormes yacimientos de hidrocarburos en nuestro territorio. De manera casi sincrónica, esos yacimientos fueron catalogados como objetivos estratégicos dentro del esquema de seguridad nacional de Estados Unidos y se inició el despliegue del juego diplomático mexicano. El desarrollo del arduo proceso de renegociación en que se enfrascó así la burguesía mexicana, ha contado en su favor con un contexto mundial que se caracteriza por cambios globales en la correlación internacional de fuerzas y por las pugnas interimperialistas que han debilitado la hegemonía norteamericana.

Las posiciones mexicanas contienen dos aspectos. Uno se inscribe en la tradición histórica que la burguesía se apropia en la Constitución, desarrolla en formulaciones doctrinarias y de principios y practica el Estado que surge de la revolución. Se distingue por su propósito de conservar los recursos naturales bajo control estatal, por la defensa de la soberanía y por su tinte nacionalista. Las características de esa política, que ha sido inherente al desarrollo del capitalismo en México, continúan causando estragos en el pensamiento progresista. El otro aspecto que conforma la actual política exterior mexicana, contiene elementos de ruptura, puesto que se implica en una orientación de carácter ofensivo que pretende obtener para el Estado una preeminencia regional.

Los energéticos han sido la palanca privilegiada de la re-negociación que impulsa la burguesía mexicana. Su proyecto regional más definido, aunque hasta ahora no parece exitoso, encarnó en el acuerdo petrolero de San José, firmado en agosto de 1980 con el gobierno venezolano, mediante el cual se canalizaron petróleo y créditos a los países del Caribe y Centroamérica. Las dictaduras guatemalteca y salvadoreña tropezaron así con una nueva fuente de financiamiento. Otro instrumento importante de la nueva diplomacia mexicana, lo constituye la alianza del PRI y del gobierno con la socialdemocracia internacional. Esta alianza alcanzó dimensión continental en octubre de 1979 al organizarse en México la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. El PRI ha mantenido la presidencia de esta alianza de partidos.

Todo lo dicho induce a pensar que, trabajosamente y quizá por los caminos más inesperados, se mantendrá para la burguesía y el Estado mexicano la necesidad de renegociar sus relaciones con el imperialismo y buscar una nueva ubicación en el contexto regional. Esa voluntad política no parece ser coyuntural ni depender del empeño subjetivo de un gobierno. Pero se puede constatar que la caída de los precios del petróleo y, sobre todo, la terrible crisis que ha azotado al país desde febrero, provocaron también un apaciguamiento de la ofensiva diplomática mexicana.

El artículo de Guadalupe Pacheco que publicamos en esta entrega analiza la política centroamericana del gobierno mexicano en el periodo comprendido entre agosto de 1981 y marzo de 1982.

-Rubén Jiménez Ricardez

El conflicto de las Malvinas es como un prisma, donde se yuxtaponen y se cortan numerosas

superficies: las relaciones interamericanas, las aspiraciones argentinas a un nuevo status en el orden internacional, la lucha de clases en Argentina y el papel que allí tienen los militares, entre muchas otras. Analizar ese conflicto implica, pues, considerar al prisma en su conjunto pero, en aras de la profundidad y del rigor, detenerse en el examen de una o dos de sus facetas. Es lo que hacen Alberto Spagnolo y Roberto Estes, en el artículo que publicamos en este número. Es más de lo que haré aquí, llamando la atención del lector para lo que no llega a ser siquiera una superficie entera, sino tan sólo un punto de intersección.

Me refiero a la preeminencia que adquirieron, después de las Malvinas, las cuestiones relativas a la seguridad. En los mensajes emanados de los organismos regionales, de las oficinas presidenciales, cancillerías y, desde luego, estados mayores latinoamericanos, se registra una preocupación inusitada con todo lo que se vincule a seguridad económica, política, militar: seguridad nacional, en suma. Es como si, de pronto, se hubiera abatido sobre los sectores dirigentes de América Latina la sensación de la enorme vulnerabilidad de los sistemas sociopolíticos en que se asienta su poder.

Ello sorprende, porque esa vulnerabilidad no es nueva. El desarrollo económico, la estabilidad política, la defensa exterior de las naciones latinoamericanas han dependido siempre —en tanto que prototipos que son de sociedades capitalistas dependientes— de lo que pasa en y entre los centros imperialistas. Si la subordinación a Estados Unidos para asegurar "la defensa de Occidente", en la segunda guerra mundial, no fuera suficiente para demostrarlo, lo sería el abandono por los gobiernos y ejércitos latinoamericanos de una perspectiva estratégica propia en el plano internacional en beneficio de la adopción de la doctrina de la contrainsurgencia, impuesta por Estados Unidos a principios de los sesenta.

El que esos países se planteen hoy una política de seguridad en función de intereses netamente nacionales y basada en la autosuficiencia, por condicionada que ésta quede a mecanismos regionales, no puede menos que causar extrañeza. Hay que atribuir ese cambio a la voluntad de poder que —nacida al calor del propio desarrollo económico y acicateada por el crujido de las estructuras internacionales que han sostenido hasta hoy la dominación burguesa en nuestros países— se ha proyectado desde los cuarteles y comienza a convertirse en la ideología de nuestra clase dominante. No se trata, en realidad, de una sola intersección: la que incide en el cruce entre la nación y el sistema

imperialista mundial, sino también de la que se establece entre la conciencia burguesa y la ideología militar.

La crisis de los años treinta gestó y la segunda guerra precipitó, la confluencia de las distintas naciones que heredara a América el siglo XIX, al tiempo que se afirmaba en ellas un nacionalismo que —en la mejor tradición del siglo pasado— hacía de la economía el instrumento por excelencia para la consecución de sus objetivos. La subordinación ideológica y orgánica del movimiento obrero y la marginación del campesinado aparecían, entonces, como requisitos *sine qua non* para alcanzarlos.

Hoy, la crisis mundial esboza en el límite de la conciencia burguesa la posibilidad y la conveniencia de una efectiva integración económica regional como medio para afirmar el proyecto nacional. La contradicción latente en este planteamiento es real, pero no es excluyente en sus términos, como lo demuestra el desarrollo contemporáneo de Europa occidental. No está allí, en definitiva, el obstáculo a esa estrategia en ciernes, sino más bien en la cuestión obrera y campesina, para la cual se pretende mantener el mismo esquema de tratamiento, sin considerar las modificaciones que en ella han intervenido durante el periodo.

Ningún análisis sobre la situación actual y las tendencias que trabajan la realidad latinoamericana tiene validez si no se plantea en esta perspectiva. Hacerlo es uno de los méritos más destacados del artículo que aquí publicamos sobre la Argentina de las Malvinas.

—Ruy Mauro Marini

Cuadernos Políticos 29

Error advertido

Página 85, segunda columna, cuarta línea.

Dice:

Dado que los renovadores no eran un grupo o fracción homogéneos, sus concepciones vinieron rápidamente a incluir un amplio espectro de...

Debería decir:

De la misma manera en que los renovadores no eran un grupo o fracción homogénea, la oposición a sus concepciones vino rápidamente a incluir un amplio espectro de . .